



Asamblea General

Distr. general
19 de febrero de 2021
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 89º período de sesiones, 23 a 27 de noviembre de 2020

Opinión núm. 81/2020, relativa a Ho Van Hai (Viet Nam)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 23 de julio de 2020 al Gobierno de Viet Nam una comunicación relativa a Ho Van Hai. El Gobierno respondió a la comunicación el 22 de octubre de 2020. Viet Nam es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).



Información recibida

Comunicación de la fuente

a) Contexto

4. Ho Van Hai es un ciudadano de Viet Nam que obtuvo la residencia permanente en los Estados Unidos de América con validez por un período de diez años. El Sr. Ho, nacido en Viet Nam en 1964, es médico y dirige una clínica privada, Asia Polyclinic, situada en P. Linh Tay Ward, en el distrito Thu Duc de Ciudad Ho Chi Minh. También es presidente de la Fundación Go West, una organización no gubernamental que fundó en 2014 para ayudar a los jóvenes vietnamitas a obtener becas ofrecidas por universidades e instituciones de enseñanza superior occidentales. Además, tiene un blog y ha escrito artículos para promover la educación.

5. El Sr. Ho escribía sobre las políticas del Gobierno vietnamita en los medios sociales. Sus comentarios en línea abarcaban toda una serie de temas políticos, pero se centraban sobre todo en el modo en que se gestionaban las cuestiones ambientales. Tras el derrame tóxico industrial de la planta de Formosa Ha Tinh Steel Corporation que se produjo en abril de 2016 y que afectó a varias provincias del centro de Viet Nam, el Sr. Ho, expresándose a través de su blog y de su perfil personal en los medios sociales, se sumó a otros activistas y organizaciones medioambientales para criticar la respuesta del Gobierno, sugerir que se organizaran protestas pacíficas, proponer una reforma civil y reclamar que el Gobierno rindiera cuentas.

b) Detención y prisión preventiva

6. Según la fuente, el Sr. Ho tenía previsto viajar a los Estados Unidos en noviembre de 2016. Sin embargo, antes de la fecha programada de su viaje, fue detenido por unos agentes del Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh, el 2 de noviembre de 2016, cuando se encontraba en la clínica Asia Polyclinic.

7. La fuente informa al Grupo de Trabajo de que la policía registró la computadora del Sr. Ho y encontró 36 artículos que supuestamente contenían “información antiestatal”. Las autoridades locales afirmaron que el Sr. Ho había sido “sorprendido en el acto de distribuir información y material antiestatales en Internet”.

8. La fuente informa al Grupo de Trabajo de que el Sr. Ho fue acusado de “realizar actividades de propaganda contra el Estado” con arreglo al artículo 88 del Código Penal de 1999, en su versión modificada en 2009. Las autoridades alegaron que el Sr. Ho había difundido información tergiversada que había erosionado la confianza pública en el Gobierno. Además, los agentes de policía afirmaron que habían estado vigilando las actividades en línea del Sr. Ho antes de su detención.

9. Inmediatamente después de la detención, el Sr. Ho fue recluido en el centro de detención de Phan Dang Luu mientras se le investigaba. En diciembre de 2017, el Sr. Ho fue trasladado del centro de detención de Phan Dang Luu a la prisión de Chi Hoa, sin previo aviso. Dado el carácter repentino del traslado, el Sr. Ho no pudo llevarse sus objetos personales, por lo que tuvo que dormir sobre un suelo de baldosas sin colchoneta durante al menos tres semanas.

c) Actuaciones judiciales y recurso

10. El 1 de febrero de 2018, el Sr. Ho fue juzgado y declarado culpable por el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh. El juicio, que se celebró en secreto y a puerta cerrada, duró solo un día. La familia del Sr. Ho no fue informada del juicio hasta dos días antes de que este comenzara, y únicamente se autorizó la presencia de dos familiares cercanos. Dado que su familia carecía de recursos, el Sr. Ho no pudo contar con la asistencia de un abogado durante el juicio. Al final de las actuaciones, fue condenado a una pena de cuatro años de prisión, seguidos de dos años de arresto domiciliario.

11. El 3 de marzo de 2018, el Tribunal Superior Popular de Ciudad Ho Chi Minh admitió a trámite el recurso interpuesto por el Sr. Ho y se programó la correspondiente vista para el

19 de junio de 2018. Se había acordado que la vista sería pública, sin embargo, el 19 de junio de 2018, la familia del Sr. Ho fue informada de que el juicio se retrasaría unos días y, más adelante, supo que se aplazaría indefinidamente. No se adujo ningún motivo para justificar el aplazamiento. El Sr. Ho no tuvo conocimiento de que se había aplazado la vista, dado que no contaba con representación letrada ni tenía acceso a información en la prisión de Chi Hoa.

12. Según la fuente, el Sr. Ho permaneció recluso en la prisión de Chi Hoa, en Ciudad Ho Chi Minh, en condiciones muy severas. El Sr. Ho padece varios problemas de salud crónicos, como gingivitis, hipertensión arterial y diabetes. Al parecer, esos problemas de salud se agravaron durante su estancia en la prisión de Chi Hoa. Además, el Sr. Ho no recibía una cantidad suficiente de alimentos ni un tratamiento adecuado para el seguimiento y control de sus problemas de salud.

13. La fuente indica que, aunque el Sr. Ho no fue torturado directamente, vivía con temor a serlo. La fuente indica también que el centro de detención de Phan Dang Luu y la prisión de Chi Hoa son conocidos por sus deplorables condiciones de reclusión y por los actos de tortura que en ellos se infligen a los presos, lo cual generaba presión psicológica al Sr. Ho. La fuente informa al Grupo de Trabajo de que el Sr. Ho abandonó la prisión de Chi Hoa el 17 de abril de 2020 y actualmente se encuentra cumpliendo los dos años de arresto domiciliario que se le impusieron como parte de su condena.

d) Análisis de las vulneraciones cometidas

14. La fuente sostiene que la detención y la privación de libertad del Sr. Ho fueron arbitrarias y se inscriben en las categorías I, II y III de las categorías de detención arbitraria a las que se refiere el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se le presentan.

i. Categoría I

15. La fuente alega que la privación de libertad fue arbitraria porque el Sr. Ho fue recluso en régimen de incomunicación, fue detenido sin que un juez hubiera autorizado la privación de libertad y fue enjuiciado en virtud de leyes poco claras y de leyes utilizadas para atacar o silenciar a quienes critican al Gobierno.

16. La fuente alega que se vulneró el artículo 9, párrafos 3 y 4, del Pacto porque el Sr. Ho no fue llevado sin demora ante un juez u otro funcionario judicial ni fue juzgado en un plazo razonable y puesto en libertad tras su detención. El Sr. Ho fue detenido el 2 de noviembre de 2016, pero su juicio no comenzó hasta 15 meses después, el 1 de febrero de 2018. Además, la fuente señala que el juicio se celebró en secreto y a puerta cerrada. La familia del Sr. Ho no fue informada del juicio hasta dos días antes de que este comenzara, y solo se autorizó la presencia de dos familiares cercanos. La familia carecía de recursos para contratar a un abogado, por lo que el Sr. Ho no contó con asistencia letrada durante el juicio.

17. Tras interponer un recurso contra el fallo condenatorio, el Sr. Ho no fue llevado ante un juez u otro funcionario judicial en un plazo razonable. El 3 de marzo de 2018, el Tribunal Superior Popular de Ciudad Ho Chi Minh admitió a trámite el recurso del Sr. Ho, pero, el 19 de junio de 2018, la fecha programada para la vista, la familia del Sr. Ho fue informada de que esta se aplazaría unos días y, más adelante, supo que la causa se había aplazado indefinidamente. El tribunal no ofreció ninguna explicación para justificar el aplazamiento.

18. La fuente afirma que se vulneró el artículo 9, párrafo 1, del Pacto y el derecho interno vietnamita porque no se presentó una orden judicial en el momento en que la policía detuvo al Sr. Ho. La detención se practicó de manera espontánea, después de que la policía registrara la computadora del Sr. Ho y encontrara 36 artículos que consideró que constituirían “información antiestatal”. La fuente sostiene que esta cadena de acontecimientos equivale a una privación de libertad sin autorización judicial.

19. La fuente afirma que se vulneró el artículo 15, párrafo 1, del Pacto al condenar al Sr. Ho a una pena de cuatro años de prisión, seguidos de dos años de arresto domiciliario, en virtud del artículo 88 del Código Penal. En ese artículo se tipifica como delito la realización de actividades de propaganda contra el Estado y, según la fuente, la disposición ha sido criticada por varias organizaciones de derechos humanos por ser poco precisa y dar pie a que las autoridades hagan un uso abusivo de ella. La fuente señala también que en el artículo 88

no se ofrece a los ciudadanos una explicación adecuada de la manera en que la ley limita su conducta. El artículo 88 no contiene precisiones suficientes para que las personas puedan adecuar su conducta a la ley, es poco preciso y se ha utilizado para enjuiciar a personas sin justificación suficiente.

ii. Categoría II

20. La fuente afirma que la detención fue arbitraria porque el Sr. Ho fue detenido, privado de libertad y condenado por ejercer su derecho a la libertad de expresión. La fuente observa que, aunque este derecho puede restringirse en determinadas circunstancias, esas circunstancias no se daban en el presente caso.

21. La fuente afirma que las autoridades vulneraron el artículo 19 del Pacto y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos porque el Sr. Ho fue detenido arbitrariamente y enjuiciado como consecuencia directa de su ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

22. La fuente afirma que la tipificación, en el artículo 88 del Código Penal, del delito de “realizar actividades de propaganda” contraviene la libertad de expresión personal, ya que con ella se penalizan vagamente un amplio espectro de actos de expresión y difusión de información. El Sr. Ho fue acusado, con arreglo a ese artículo, de realizar actividades de propaganda contra el Estado. Independientemente de la veracidad de los hechos alegados, las autoridades han privado de libertad al Sr. Ho en virtud de una ley que, en sí misma, es incompatible con el derecho a la libertad de expresión, garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el Pacto.

23. La fuente alega también que, además de que el Sr. Ho fue condenado en virtud de una ley que vulnera su derecho a la libertad de expresión, se le atacó específicamente por criticar al Gobierno en su blog. Por tanto, su privación de libertad entrañó una vulneración de su derecho a la libertad de expresión tanto *de jure* como *de facto*. El Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh alegó que el Sr. Ho había difundido información “tergiversada” que había erosionado la confianza pública en el Gobierno. En opinión de la fuente, es evidente que el Gobierno decidió privar de libertad al Sr. Ho en represalia por sus publicaciones en línea en las que lo criticaba y por su reacción al desastre ecológico de la planta de Formosa Ha Tinh Steel Corporation.

24. Aunque con arreglo al artículo 19 del Pacto se admiten excepciones limitadas en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública y el orden público, la fuente alega que esas limitaciones estrictamente definidas no son aplicables en el presente caso. El Gobierno afirmó que el Sr. Ho había sido privado de libertad por realizar actividades de propaganda contra el Estado, las cuales pueden prohibirse a tenor de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Pacto, pero, en realidad, ninguna de las publicaciones en línea del Sr. Ho incitaba directa o indirectamente a la violencia ni razonablemente podía considerarse una amenaza para la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos o la reputación de terceros. Más bien, el Gobierno estaba utilizando el pretexto de las “actividades de propaganda” para silenciar las críticas en su contra, lo que no entra dentro de los fines admisibles con arreglo al artículo 19, párrafo 3, del Pacto.

iii. Categoría III

25. La fuente afirma que la detención y la privación de libertad del Sr. Ho fueron arbitrarias porque, en el presente caso, se incumplieron total o parcialmente las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial.

26. La fuente precisa que se vulneró el artículo 14, párrafo 3 c), del Pacto porque el juicio del Sr. Ho no comenzó hasta 15 meses después de su detención. El Sr. Ho fue detenido el 2 de noviembre de 2016 y su juicio no empezó hasta el 1 de febrero de 2018. Durante ese lapso, fue trasladado del centro de detención de Phan Dang Luu a la prisión de Chi Hoa, a principios de diciembre de 2017.

27. El 3 de marzo de 2018, el Tribunal Superior Popular de Ciudad Ho Chi Minh admitió a trámite el recurso interpuesto por el Sr. Ho. Estaba previsto que la vista del recurso se celebrase el 19 de junio de 2018 ante el Tribunal Superior Popular de Ciudad Ho Chi Minh.

Sin embargo, el 19 de junio, la familia del Sr. Ho fue informada de que la vista se aplazaría unos días y, más adelante, supo que se había aplazado indefinidamente. El tribunal no ofreció ninguna explicación en cuanto al motivo del aplazamiento de la causa.

28. La fuente afirma que el Gobierno vulneró el artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto, el principio 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y la regla 119 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) al no ofrecer asistencia letrada al Sr. Ho. Dado que su familia carecía de recursos para contratar a un abogado, el Sr. Ho no contó con asistencia letrada durante el juicio.

29. Según la fuente, se vulneraron el artículo 14, párrafos 1 y 3 e), del Pacto y los artículos 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos porque no se garantizó al Sr. Ho una vista imparcial y pública. Al parecer, su juicio se celebró en secreto y a puerta cerrada. Su familia no fue informada del juicio hasta dos días antes de que este comenzara, y solo se autorizó la presencia de dos familiares cercanos. Inicialmente se admitió a trámite el recurso interpuesto por el Sr. Ho y se programó una vista pública ante el Tribunal Superior Popular de Ciudad Ho Chi Minh para el 19 de junio de 2018. Sin embargo, la vista se aplazó indefinidamente sin que se proporcionara explicación alguna al respecto.

30. La fuente afirma que se vulneraron los artículos 7, 10 y 14 del Pacto, los artículos 1, 4 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios 1, 6 y 21 del Conjunto de Principios y las reglas 1 y 43 de las Reglas Nelson Mandela porque el Sr. Ho fue sometido a un trato inhumano.

31. En concreto, la fuente señala que, pese a sus problemas crónicos de salud, el Sr. Ho fue trasladado sin previo aviso del centro de detención de Phan Dang Luu a la prisión de Chi Hoa y no pudo llevarse sus pertenencias. A consecuencia de ello, se vio obligado a dormir sobre un suelo de baldosas sin colchoneta durante al menos tres semanas. En la prisión de Chi Hoa, el Sr. Ho estuvo recluso con aproximadamente otros diez presos, una situación que le resultó estresante y puso en peligro su vida. Además, la presión psicológica que sufrió en la prisión de Chi Hoa afectó negativamente al Sr. Ho. Allí vivió con temor a que se le impusiera la pena de muerte. No fue torturado directamente por la policía, pero los presos suelen sufrir intimidación mientras permanecen encarcelados.

32. La fuente afirma que se vulneraron el principio 24 del Conjunto de Principios y las reglas 22, párrafo 1, y 27, párrafo 1, de las Reglas Nelson Mandela porque el Gobierno no proporcionó al Sr. Ho la atención médica que necesitaba. El Sr. Ho ha padecido varios problemas de salud crónicos, los cuales se agravaron en la cárcel. Esos problemas de salud podrían haberse controlado fácilmente con el tratamiento adecuado, pero el Sr. Ho no recibió ese tratamiento ni la atención que requería. Debido a las condiciones en que fue recluso el Sr. Ho, su salud se deterioró rápidamente. Además, no pudo recibir alimentos ni suministros médicos de su familia.

Respuesta del Gobierno

33. El 23 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones y le pidió que, a más tardar el 22 de septiembre de 2020, facilitara información detallada actualizada sobre la situación del Sr. Ho.

34. El 11 de septiembre de 2020, el Gobierno solicitó una prórroga del plazo para presentar su respuesta. Se concedió la prórroga y se fijó como nueva fecha límite el 22 de octubre de 2020.

35. En su respuesta del 22 de octubre de 2020, el Gobierno negó las alegaciones de la fuente.

36. El Gobierno afirma que, el 1 de febrero de 2018, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh celebró el juicio y condenó al Sr. Ho a una pena de cuatro años de prisión y dos años de arresto domiciliario por realizar actividades de propaganda contra el Estado, un delito tipificado en el artículo 88 del Código Penal.

37. El Sr. Ho fue detenido y juzgado sobre la base de fundamentos jurídicos sólidos, de plena conformidad con la legislación vietnamita y en consonancia con las convenciones internacionales en las que Viet Nam es parte. Durante las actuaciones judiciales dirigidas contra el Sr. Ho, incluidas las fases de la acusación, el juicio y la ejecución de la sentencia del tribunal, las respectivas autoridades competentes de Viet Nam garantizaron el respeto de los derechos legítimos que confiere al acusado la legislación vietnamita. Según el Gobierno, el Sr. Ho admitió su delito y rechazó valerse de los servicios de un abogado defensor. Además presentó una solicitud de indulgencia.

38. El Gobierno refuta las alegaciones formuladas en la comunicación, las tacha de inexactas, alega que en su mayoría se han obtenido de fuentes sin fundamento e indica que no se ajustan a la realidad del presente caso. El Gobierno sostiene que no puede considerarse que la detención y el juicio del Sr. Ho constituyeran una detención arbitraria de ningún modo.

39. Según el Gobierno, en Viet Nam nadie es detenido, procesado ni juzgado por ejercer sus libertades fundamentales. En el conjunto coherente de los principios jurídicos rectores y las políticas de Viet Nam se reconocen, respetan y promueven los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión.

40. El Gobierno afirma que, de conformidad con el artículo 19, párrafo 3, del Pacto, en el artículo 25 de la Constitución de Viet Nam de 2013 se proclama la libertad de prensa y se reconocen a los ciudadanos el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, el derecho de reunión, el derecho de asociación y el derecho a manifestarse. Sin embargo, el ejercicio de esos derechos puede quedar sujeto a las condiciones fijadas en la ley cuando resulte necesario por razones de defensa y seguridad nacional, orden público, moralidad social y bienestar de la comunidad (art. 14, párr. 2)).

41. Los derechos de las personas privadas de libertad están plenamente reconocidos y protegidos por la Ley de Ejecución de Sentencias Penales y la Ley de Ejecución de la Detención Temporal y la Prisión Preventiva. En la Ley de Ejecución de Sentencias Penales se establece un protocolo de atención médica para los reclusos, con arreglo al cual estos son sometidos a un reconocimiento inicial a su ingreso en los establecimientos penitenciarios y, seguidamente, a revisiones trimestrales. Además, en el Decreto núm. 117/2011/ND-CP, de 15 de diciembre de 2011, se explican detalladamente la gestión penitenciaria y las asignaciones que se conceden a los reclusos en lo relativo a, por ejemplo, la alimentación, la ropa, el alojamiento, la atención médica y las visitas familiares, y en la circular núm. 07/2018/TT-BCA del Ministerio de Seguridad Pública, de 12 de febrero de 2018, se formulan orientaciones más específicas sobre las condiciones y la frecuencia de las visitas familiares y la recepción de regalos, correspondencia y comunicaciones externas.

42. Durante su privación de libertad, el Sr. Ho pudo gozar de todos los derechos que le reconocen los mencionados instrumentos jurídicos de Viet Nam. No fue objeto de tortura ni discriminación y se garantizó su derecho a la atención de la salud, de conformidad con las leyes nacionales. No hay pruebas que demuestren la existencia de un vínculo entre el estado de salud y las condiciones de reclusión del Sr. Ho, que además pudo abandonar la prisión antes de haber cumplido la totalidad de su pena.

43. En unas observaciones adicionales presentadas por el Gobierno, este sostiene que en la comunicación sobre el Sr. Ho se formulan alegaciones inexactas, extraídas en su mayoría de fuentes de fiabilidad no verificada, y se tergiversan los hechos. Según el Gobierno, el Sr. Ho fue enjuiciado por vulnerar la legislación vietnamita, no por “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

44. El Gobierno reitera que, el 2 de noviembre de 2016, la policía registró y detuvo al Sr. Ho por poseer y difundir artículos inexactos y difamatorios, que erosionaban la reputación de distintas personas y organizaciones del Estado. Según fuentes estatales, el Sr. Ho había publicado 36 artículos no autorizados con arreglo a la legislación de Viet Nam. Además, la difusión de esa información entrañó una amenaza para la seguridad nacional y el orden público y, por tanto, constituyó una contravención de la ley. El Sr. Ho fue juzgado por el delito de realizar actividades de propaganda contra el Estado, tipificado en el artículo 88 del Código Penal, de manera pública y transparente por un tribunal independiente y con competencia. El 1 de febrero de 2018, en el juicio en primera instancia, el Sr. Ho admitió el delito y expuso los hechos de forma sincera, tras lo cual fue declarado culpable. Se le impuso

una pena de cuatro años de prisión y dos años de libertad condicional. La prensa vietnamita informó de los hechos.

45. El Gobierno sostiene que, desde el momento de la detención y hasta el juicio, al dictar sentencia e imponer la pena, se respetó el derecho del Sr. Ho a gozar de las garantías procesales de conformidad tanto con la legislación vietnamita como con los tratados en los que Viet Nam es parte. En particular, las órdenes de registro y detención fueron aprobadas por la Fiscalía Popular, hay testigos que pueden probar su existencia, a saber, representantes de la Administración y varias personas que se encontraban en la residencia del Sr. Ho, y las firmaron tanto los agentes que practicaron la detención como el propio Sr. Ho. Este último no presentó ninguna queja en relación con la investigación o con el ejercicio de sus derechos durante su reclusión preventiva. El Gobierno refuta las alegaciones de que la detención fue contraria a la ley y de que el Sr. Ho fue privado de libertad arbitrariamente. Señala además que el Sr. Ho pudo abandonar la prisión antes de haber cumplido la totalidad de su pena y que, a la fecha de la respuesta del Gobierno, no se encontraba recluido.

46. Según el Gobierno, las autoridades competentes concluyeron que no cabía considerar que los actos del Sr. Ho se hubieran realizado en ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Asimismo, durante la investigación, el Sr. Ho admitió el delito, solicitó indulgencia y rechazó valerse de los servicios de un abogado defensor.

47. El Gobierno afirma que no hay motivos para que el Sr. Ho viva con miedo, dado que la pena de muerte no es aplicable al tipo de delito por el que fue condenado. El Gobierno aseguró al Grupo de Trabajo que, en Viet Nam, nadie es detenido, procesado ni juzgado por ejercer las libertades fundamentales, puesto que el país reconoce, respeta y promueve los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión. En el artículo 25 de la Constitución se garantiza expresamente la libertad de prensa y se reconocen a los ciudadanos el derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, el derecho de reunión, el derecho de asociación y el derecho a manifestarse. El ejercicio de estos derechos puede restringirse excepcionalmente por motivos de seguridad nacional, orden público, moralidad social y bienestar de la comunidad.

48. Tras ser detenido, el Sr. Ho fue recluido en el centro de detención temporal del organismo de investigación del Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh. Tras el cierre del centro de detención temporal, el Sr. Ho fue trasladado al establecimiento penitenciario de Chi Hoa. Se le proporcionaron alimentos, ropa y alojamiento durante toda la privación de libertad. El Gobierno tacha de “inexacta” la alegación formulada en la comunicación según la cual el Sr. Ho tuvo que dormir sobre un suelo de baldosas sin colchoneta durante al menos tres semanas.

49. El Gobierno refuta también la alegación de que el Sr. Ho no pudo ver a su familia y afirma que este se reunió con sus parientes 7 veces y recibió regalos de ellos en 16 ocasiones. El Sr. Ho no sufrió tortura ni intimidación durante su encarcelamiento, y las autoridades no recibieron ninguna queja o recurso del Sr. Ho ni de sus familiares en relación con las condiciones de reclusión. El Gobierno afirma asimismo que, en el establecimiento penitenciario de Chi Hoa, el Sr. Ho fue sometido a exámenes médicos regulares y recibió tratamiento para la hipertensión arterial y la gingivitis en 6 ocasiones. Además, las autoridades competentes no consideran que sus enfermedades se hayan agravado. El Gobierno niega que las condiciones de reclusión en el centro de detención de Phan Dang Luu y en el establecimiento penitenciario de Chi Hoa fueran deplorables.

50. El Gobierno reitera que, el 17 de abril de 2020, el Sr. Ho fue puesto en libertad por razones humanitarias, antes de haber cumplido la totalidad de su pena. Actualmente se encuentra en su domicilio, sujeto a una medida de libertad condicional, y no de arresto domiciliario, impuesta de conformidad con la sentencia del tribunal de primera instancia.

Comentarios adicionales de la fuente

51. La fuente señala que el Gobierno no aportó ninguna prueba sustancial para rebatir las alegaciones. El Gobierno formuló afirmaciones infundadas en respuesta a la descripción de los hechos que figura en la comunicación, según las cual las vulneraciones se inscriben en las categorías I, II y III de las categorías de detención arbitraria a las que se refiere el Grupo

de Trabajo. Dado que el Gobierno no refutó las vulneraciones descritas en la comunicación aportando pruebas objetivas, no ha satisfecho la carga de la prueba.

Deliberaciones

52. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información que le han facilitado.

53. A fin de determinar si la privación de libertad del Sr. Ho fue arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios que ha establecido en su jurisprudencia para proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de que se ha producido una vulneración del derecho internacional constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. La mera afirmación de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68).

54. El Grupo de Trabajo observa, como cuestión previa, que el Sr. Ho fue puesto en libertad unos seis meses antes de haber cumplido la totalidad de la pena y, según la fuente, actualmente está sujeto a una medida de arresto domiciliario. Aunque la fuente no ha descrito las condiciones del arresto domiciliario, lo cual impide al Grupo de Trabajo evaluar si el Sr. Ho se encuentra privado de libertad, el Grupo de Trabajo señala que, de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, se reserva el derecho de decidir, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si la privación de libertad es arbitraria o no, a pesar de la puesta en libertad de la persona interesada. En el presente caso, el Grupo de Trabajo estima que las alegaciones formuladas por la fuente son extremadamente graves y que el Sr. Ho ha pasado mucho tiempo encarcelado. Por tanto, procederá a examinar los hechos del caso.

a) Categoría I

55. Según la fuente, el Sr. Ho pasó unos 15 meses recluido en régimen de prisión preventiva. Fue detenido el 2 de noviembre de 2016, pero no fue juzgado hasta el 1 de febrero de 2018. No parece que, entre el momento de su detención y la celebración del juicio, el Sr. Ho fuera llevado ante una autoridad judicial para que esta examinara la legalidad de su privación de libertad. El Gobierno afirma que la orden de detención dictada contra el Sr. Ho fue aprobada por la Fiscalía Popular y que hay testigos que pueden probar su existencia, a saber, representantes de la Administración y varias personas que se encontraban en la residencia del Sr. Ho. El Grupo de Trabajo considera que el Gobierno podría haber proporcionado más información a este respecto.

56. Aunque se acepte el argumento de que la orden de detención del Sr. Ho fue aprobada por la Fiscalía, este hecho en sí mismo no convierte en regular una reclusión previa al juicio que, por todo lo demás, se consideraría arbitraria. Aunque el Gobierno ha alegado que la detención y la privación de libertad se ajustaron estrictamente a la legislación nacional, el Grupo de Trabajo recuerda que, como ha indicado reiteradamente en su jurisprudencia, incluso cuando una privación de libertad se ajusta a la legislación nacional, el Grupo de Trabajo debe asegurarse de que también se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho internacional¹. El Grupo de Trabajo también ha establecido en su jurisprudencia que la Fiscalía Popular no es una autoridad judicial independiente y no cumple los criterios previstos en el artículo 9 del Pacto². Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que la reclusión previa al juicio del Sr. Ho se practicó sin que se realizara una revisión judicial de su legalidad, lo que constituyó una vulneración del derecho a comparecer sin demora ante una autoridad judicial, enunciado en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto³.

¹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 46/2011; núm. 42/2012; núm. 50/2017; núm. 79/2017; núm. 1/2018; núm. 20/2018; núm. 37/2018; y núm. 50/2018.

² E/CN.4/1995/31/Add.4, párr. 57 c); y opiniones núm. 75/2017, párr. 48; núm. 35/2018, párr. 37; núm. 46/2018, párr. 50; núm. 44/2019, párr. 53; y núm. 45/2019, párr. 52. Véanse también las opiniones núm. 15/2020 y núm. 16/2020; Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 32; CCPR/C/VNM/CO/3, párr. 26; y CAT/C/VNM/CO/1, párrs. 24 y 25.

³ En relación con esta conclusión, el Grupo de Trabajo reitera que, aunque la prisión preventiva prolongada pueda estar permitida con arreglo al Código de Procedimiento Penal de 2003 de Viet Nam

57. Asimismo, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, la prisión preventiva debe ser la excepción y no la norma y debe ordenarse por el período más breve posible⁴. En el artículo 9, párrafo 3, del Pacto se reconoce la libertad como el planteamiento general, y la privación de libertad como una excepción a este⁵. Por tanto, la reclusión previa al juicio debe basarse en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria para fines tales como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito⁶. Según la información facilitada al Grupo de Trabajo en el presente caso, el Sr. Ho tenía la intención de viajar a los Estados Unidos, donde goza de la condición de residente permanente. Sin embargo, el Gobierno no sugiere que con ese viaje programado el Sr. Ho pretendiera escapar a la acción judicial.

58. Además, en el presente caso, es evidente que no se tuvieron en cuenta las circunstancias personales del Sr. Ho ni se consideraron alternativas a la privación de libertad previa al juicio. No había ningún fundamento jurídico para no someter a revisión judicial la medida de prisión preventiva a fin de verificar que procedía imponerla.

59. La fuente formuló alegaciones generales en relación con la reclusión en régimen de incomunicación, a saber, que el Sr. Ho había estado sometido a ese régimen mientras permaneció en prisión preventiva, desde su detención, el 2 de noviembre de 2016, hasta su juicio, 1 de febrero de 2018; que durante ese lapso había sido trasladado del centro de detención de Phan Dang Luu a la prisión de Chi Hoa, a principios de diciembre de 2017; que, al parecer, su familia no había podido comunicarse con él y no había sido informada del juicio hasta dos días antes de que este comenzara; y que el Sr. Ho no había podido recibir alimentos o suministros médicos de su familia. El Gobierno refutó esas alegaciones aduciendo que, en realidad, el Sr. Ho se había reunido con sus parientes 7 veces y había recibido regalos de ellos en 16 ocasiones. Sin embargo, no se facilitaron detalles concretos sobre las horas o las fechas. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo se inclina por aceptar la versión de la fuente, según la cual el Sr. Ho permaneció incomunicado durante su reclusión previa al juicio.

60. El Grupo de Trabajo ha afirmado reiteradamente que la reclusión de en régimen de incomunicación vulnera el derecho a impugnar ante un tribunal la legalidad de la privación de libertad, reconocido en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto⁷. El control judicial de la privación de libertad constituye una garantía fundamental de la libertad personal⁸ y resulta esencial para asegurar que la privación de libertad tenga fundamento legítimo. Dadas las circunstancias de la reclusión previa al juicio del Sr. Ho, este no pudo impugnar su privación de libertad ante un tribunal. Por consiguiente, también se vulneró su derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2, párrafo 3, del Pacto. Además, el Sr. Ho fue sustraído del amparo de la ley, lo que constituyó una vulneración de su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 16 del Pacto.

61. La fuente afirma que la tipificación, en el artículo 88 del Código Penal, del delito de “realizar actividades de propaganda”, del que se acusó al Sr. Ho, contraviene la libertad de expresión personal, ya que con ella se penalizan vagamente un amplio espectro de actos de expresión y difusión de información. La fuente alega que esa acusación llevó a que el Sr. Ho fuera privado de libertad en virtud de una ley que, en sí misma, es incompatible con el derecho a la libertad de expresión, garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el Pacto. El Gobierno reconoce la existencia del delito de “realizar actividades de propaganda contra el Estado”, que se encuentra tipificado en el artículo 88 del Código Penal.

y otros preceptos legales, como la facultad de la Fiscalía Popular de aprobar órdenes de detención, ello no anula el derecho a la revisión judicial de una privación de libertad y, por consiguiente, dichas disposiciones son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.

⁴ A/HRC/19/57, secc. III.A.

⁵ *Ibid.*, párr. 54.

⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 38.

⁷ Opiniones núm. 45/2017, núm. 46/2017, núm. 35/2018, núm. 9/2019, núm. 44/2019, núm. 45/2019, núm. 15/2020 y núm. 16/2020.

⁸ A/HRC/30/37, párr. 3; y CAT/C/VNM/CO/1, párr. 24.

62. El Grupo de Trabajo considera que la disposición en virtud de la cual se condenó al Sr. Ho es vaga y excesivamente amplia. Para poder determinar que alguien ha “realizado actividades de propaganda” en el contexto del ejercicio de la libertad fundamental de expresión, es necesario que, como mínimo, se hayan definido claramente los elementos de la conducta constitutiva de delito, teniendo en cuenta la libertad de expresión. El Grupo de Trabajo ya ha indicado claramente que el enjuiciamiento en virtud de leyes vagas y excesivamente amplias vulnera el principio de legalidad y, en concreto, ha concluido que el artículo 88 del Código Penal no satisface ese principio⁹. El principio exige que las leyes se formulen con suficiente precisión a fin de que sean accesibles y comprensibles para el ciudadano, de modo que este pueda ajustar a ellas su conducta¹⁰. No era razonable esperar que el Sr. Ho previese que incurriría en delito en virtud de esa disposición al ejercer su libertad de expresión utilizando pacíficamente los medios sociales para criticar la política del Gobierno en relación con el derrame tóxico industrial de la planta de Formosa Ha Tinh Steel Corporation, sugerir que se organizaran protestas pacíficas, proponer una reforma civil y reclamar que el Gobierno rindiera cuentas.

63. Por estas razones, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno no fundamentó debidamente en derecho la privación de libertad del Sr. Ho y, por consiguiente, esta se inscribe en la categoría I de la detención arbitraria.

b) Categoría II

64. La fuente afirma que la privación de libertad fue arbitraria porque el Sr. Ho fue detenido, recluso y condenado por ejercer su libertad de expresión en circunstancias que no entraban dentro de las que justifican la suspensión de las libertades fundamentales. Según la fuente, la detención y la privación de libertad entrañaron una vulneración del artículo 19 del Pacto y del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La fuente alega asimismo que, además de que el Sr. Ho fue condenado en virtud de una ley que vulnera su derecho a la libertad de expresión, se le atacó específicamente por criticar al Gobierno en su blog. El Gobierno decidió privar de libertad al Sr. Ho en represalia por sus publicaciones en línea en las que lo criticaba y por su reacción al desastre ecológico de la planta de Formosa Ha Tinh Steel Corporation.

65. La fuente reconoce que, con arreglo al artículo 19 del Pacto, se admiten limitaciones de los derechos fundamentales en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública y el orden público, pero alega que esas limitaciones estrictamente definidas no son aplicables en el presente caso. Aunque el Gobierno adujo que la privación de libertad era necesaria para proteger el interés y la seguridad nacionales, en realidad, no cabía razonablemente considerar que las actividades del Sr. Ho constituyesen una amenaza para la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos o la reputación de terceros. Incumbe al Gobierno demostrar la posibilidad razonable de considerar que las actividades del Sr. Ho hayan constituido una amenaza para la seguridad nacional, el orden público, la moral pública u otros principios similares. Sobre la base de la información presentada, el Grupo de Trabajo estima que el Gobierno no ha cumplido esa carga.

66. En opinión del Grupo de Trabajo, las acusaciones formuladas y las condenas dictadas con arreglo al artículo 88 del Código Penal de Viet Nam por el ejercicio pacífico de los derechos no pueden considerarse compatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos ni con el Pacto¹¹. El Grupo de Trabajo lamenta que, con respecto a la invocación de delitos vagos e imprecisos contra la seguridad nacional sin distinción entre los actos violentos que pueden suponer una amenaza para la seguridad nacional y el ejercicio pacífico

⁹ Opiniones núm. 46/2011, párr. 22; núm. 27/2012, párr. 41; núm. 26/2013, párr. 68; núm. 40/2016, párr. 36; núm. 35/2018, párr. 36; núm. 36/2018, párr. 51; núm. 46/2018, párr. 62; núm. 9/2019, párr. 39; núm. 45/2019, párr. 54; y núm. 15/2020, párr. 58. Véase también CCPR/C/VNM/CO/3, párrs. 45 y 46.

¹⁰ Opinión núm. 41/2017, párrs. 98 a 101. Véanse también la opinión núm. 62/2018, párrs. 57 a 59; y Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 22.

¹¹ Véanse las opiniones núm. 46/2011; núm. 27/2012; núm. 26/2013; núm. 40/2016; núm. 35/2018; núm. 36/2018; núm. 46/2018; núm. 9/2019; y núm. 45/2019. Véase también A/HRC/41/7, párrs. 38.73 y 38.171.

del derecho a las libertades de opinión y de expresión, la situación no haya cambiado desde que visitó Viet Nam en octubre de 1994¹².

67. A este respecto, el Grupo de Trabajo comparte y reitera la preocupación expresada por el Comité de Derechos Humanos ante las excesivas restricciones impuestas por el Gobierno de Viet Nam a la libertad de reunión pacífica y las manifestaciones públicas, incluidas las relativas a los derechos humanos. Preocupan asimismo al Grupo de Trabajo las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza y de detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas del orden para disolver las manifestaciones, en particular las relacionadas con los derechos laborales, la expropiación de tierras y el desastre ecológico de la planta de Formosa Ha Tinh Steel Corporation¹³.

68. El Grupo de Trabajo observa que en el artículo 19, párrafo 2, del Pacto se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Abarca también el pensamiento político, los comentarios sobre los asuntos públicos, la discusión sobre derechos humanos y el periodismo¹⁴. Ampara la defensa y la expresión de opiniones, incluidas aquellas que son críticas o no conformes con la política gubernamental¹⁵. El Grupo de Trabajo considera que la conducta del Sr. Ho se inscribió dentro del derecho a la libertad de opinión y de expresión, protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto, y que el Sr. Ho fue privado de libertad por ejercer esos derechos. En relación con esta conclusión, el Grupo de Trabajo toma nota de la afirmación del Gobierno de que las publicaciones del Sr. Ho en los medios sociales constituyeron actividades de propaganda contra el Gobierno de Viet Nam.

69. Tanto en los comentarios críticos sobre la política del Gobierno que publicaba en los medios sociales como en su labor periodística, el Sr. Ho trataba cuestiones de interés público. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Ho fue privado de libertad por ejercer su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, consagrado en el artículo 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 25 a) del Pacto¹⁶.

70. Nada indica que en el presente caso puedan aplicarse las restricciones de esos derechos autorizadas por los artículos 19, párrafo 3, y 25 del Pacto. El Grupo de Trabajo no está convencido de que enjuiciar al Sr. Ho fuera necesario para proteger un interés legítimo reconocido en esas disposiciones ni de que su condena y la pena que se le impuso constituyeran una respuesta proporcional a sus actividades. No hay indicios de que las críticas al Gobierno formuladas por el Sr. Ho incitasen directa o indirectamente a la violencia ni de que fuese razonable considerar que amenazaban la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos o la reputación de terceros. El Consejo de Derechos Humanos ha instado a los Estados a que se abstengan de imponer restricciones en virtud del artículo 19, párrafo 3, que no sean compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos¹⁷. El Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

71. Según la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y a señalar a la

¹² E/CN.4/1995/31/Add.4, secc. III.B.1.b.3. Véase también CCPR/C/VNM/CO/3, párr. 45 d).

¹³ CCPR/CO/75/VNM, párr. 21.

¹⁴ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011), párr. 11.

¹⁵ Opiniones núm. 79/2017, párr. 55; y núm. 8/2019, párr. 55.

¹⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 25 (1996), párr. 8; y opiniones núm. 46/2011; núm. 42/2012; núm. 26/2013; núm. 40/2016; núm. 35/2018; núm. 36/2018; núm. 45/2018; núm. 46/2018; núm. 9/2019; núm. 44/2019; núm. 45/2019; núm. 15/2020; y núm. 16/2020.

¹⁷ Resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 5 p).

atención del público cuestiones relativas a la observancia de los derechos humanos¹⁸. La fuente ha demostrado que el Sr. Ho fue privado de libertad por ejercer los derechos que lo amparan en virtud de esa declaración. El Grupo de Trabajo ha determinado que al privar de libertad a personas por realizar actividades de defensa de los derechos humanos se está vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley, consagrado en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 26 del Pacto¹⁹.

72. El Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad del Sr. Ho obedeció al ejercicio pacífico por este de su derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como de su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, y constituyó una vulneración del artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 26 del Pacto. Por consiguiente, la privación de libertad del Sr. Ho se inscribe en la categoría II de la detención arbitraria.

c) Categoría III

73. Habiendo concluido que la reclusión del Sr. Ho se inscribe en la categoría II de la detención arbitraria, el Grupo de Trabajo subraya que no debería haberse celebrado ningún juicio contra el Sr. Ho. Sin embargo, este fue juzgado, declarado culpable y condenado el 1 de febrero de 2018. La información presentada por la fuente pone de manifiesto que se vulneró el derecho del Sr. Ho a un juicio imparcial.

74. La fuente alega que la detención y la reclusión del Sr. Ho fueron arbitrarias porque se incumplieron las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial. La presunta vulneración se refiere al artículo 14, párrafo 3 c), del Pacto. El juicio del Sr. Ho no comenzó hasta 15 meses después de su detención. La fuente afirma que se vulneraron el artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto, el principio 18 del Conjunto de Principios y la regla 119 de las Reglas Nelson Mandela porque no se brindó asistencia letrada al Sr. Ho. Dado que su familia carecía de recursos para contratar a un abogado, el Sr. Ho no contó con asistencia letrada durante el juicio.

75. Según la fuente, también se vulneraron el artículo 14, párrafos 1 y 3 e), del Pacto y los artículos 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que no se garantizó al Sr. Ho una vista imparcial y pública. Al parecer, su juicio se celebró en secreto y a puerta cerrada. Su familia no fue informada del juicio hasta dos días antes de que este comenzara, y solo se autorizó la presencia de dos familiares cercanos. Además, se vulneraron los artículos 7, 10 y 14 del Pacto, los artículos 1, 4 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios 1, 6 y 21 del Conjunto de Principios y las reglas 1 y 43 de las Reglas Nelson Mandela porque el Sr. Ho fue sometido a un trato inhumano.

76. La fuente describe en detalle los problemas de salud crónicos del Sr. Ho, su repentino traslado de un centro de detención a una prisión y las condiciones supuestamente deplorables en las que permaneció recluso, que le generaron presión psicológica y pusieron en peligro su vida. La fuente observa además que se vulneraron el principio 24 del Conjunto de Principios y las reglas 22, párrafo 1, y 27, párrafo 1, de las Reglas Nelson Mandela porque el Gobierno no proporcionó al Sr. Ho la atención médica que necesitaba.

77. El Grupo de Trabajo concluye que no se reconoció al Sr. Ho el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, dado que transcurrieron más de 15 meses desde que se practicó la detención, el 2 de noviembre de 2016, hasta que se celebró el juicio, el 1 de febrero de 2018. La información proporcionada por el Gobierno corrobora las fechas de la detención y el juicio. Aunque el carácter razonable de la dilación en llevar un caso a juicio debe evaluarse a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, teniendo en cuenta la complejidad de este, la conducta del imputado y la manera en que las autoridades hayan gestionado el

¹⁸ Resolución 53/144 de la Asamblea General, anexo, arts. 1 y 6 c). Véase también la resolución 74/146 de la Asamblea General, párr. 12.

¹⁹ Opiniones núm. 75/2017; núm. 79/2017; núm. 35/2018; núm. 36/2018; núm. 45/2018; núm. 46/2018; núm. 9/2019; núm. 44/2019; núm. 45/2019; núm. 15/2020; y núm. 16/2020.

asunto²⁰, de la información facilitada por la fuente y por el Gobierno no se desprende que existieran factores que pudieran haber justificado la dilación del juicio del Sr. Ho. Por tanto, esta dilación constituye una vulneración de los artículos 9, párrafo 3, y 14, párrafo 3 c), del Pacto. Como ya se ha señalado, el Sr. Ho ni siquiera debería haber sido privado de libertad por ejercer pacíficamente los derechos que lo amparan en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La dilación en llevar su caso a juicio fue inadmisibles²¹ y agravó la transgresión de las disposiciones del Pacto anteriormente señaladas.

78. El Sr. Ho se enfrentaba a una acusación grave de haber realizado actividades de propaganda contra el Estado, un delito que conlleva una pena de prisión de larga duración. El Gobierno alega que la conducta del Sr. Ho pudo afectar negativamente a la seguridad nacional. La fuente y el Gobierno coinciden en que el juicio del Sr. Ho solo duró un día. El Gobierno indica que el Sr. Ho se confesó culpable y solicitó indulgencia y fue condenado sobre esa base.

79. La fuente afirma, sin embargo, que, tras ser condenado, el Sr. Ho interpuso un recurso contra el fallo condenatorio, que, el 3 de marzo de 2018, el Tribunal Superior Popular de Ciudad Ho Chi Minh admitió a trámite el recurso y que la vista se programó para el 19 de junio de 2018. Además, se había acordado que la vista sería pública. No obstante, el 19 de junio de 2018, la familia del Sr. Ho fue informada de que el juicio se retrasaría unos días y, más adelante, supo que se aplazaría indefinidamente. No se adujo ningún motivo para justificar ese aplazamiento. El Gobierno indica en su respuesta que la vista se suspendió porque el Sr. Ho retiró el recurso. El Grupo de Trabajo considera que las alegaciones formuladas por el Gobierno en relación con el recurso resultan contradictorias. Así pues, se inclina por creer la afirmación de la fuente de que se interpuso un recurso contra el fallo condenatorio, y, por consiguiente, rechaza la alegación de que el Sr. Ho se confesó culpable durante el primer juicio.

80. El primer juicio del Sr. Ho, que fue muy breve, se celebró en un solo día, pese a que al acusado se le imputaba el grave delito de atentar contra la seguridad nacional. Como ya ha señalado el Grupo de Trabajo²², la brevedad de un juicio por un delito grave parece indicar que se ha determinado la culpabilidad del acusado antes de la vista, lo que constituye una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto.

81. Con respecto al derecho a la asistencia letrada, la fuente afirma que se vulneraron el artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto, el principio 18 del Conjunto de Principios y la regla 119 de las Reglas Nelson Mandela porque no se brindó asistencia letrada al Sr. Ho. Dado que su familia carecía de recursos para contratar a un abogado, el Sr. Ho no contó con asistencia letrada durante el juicio. El Gobierno, sin embargo, sostiene que, durante la investigación, el Sr. Ho admitió el delito, solicitó indulgencia y rechazó valerse de los servicios de un abogado defensor. Lo que el Gobierno no indica es si informó al Sr. Ho o a su familia sobre el procedimiento de designación de un asesor letrado y sobre la manera de presentar la documentación requerida.

82. El Grupo de Trabajo no considera convincentes las alegaciones del Gobierno sobre la falta de representación letrada del Sr. Ho, dada la gravedad de la acusación a la que se enfrentaba. El derecho a la asistencia letrada se reconoce desde el momento de la privación de libertad y en todos los entornos de reclusión, incluidos la justicia penal, la detención de inmigrantes, la detención administrativa, el internamiento en establecimientos de atención de la salud (también en el contexto de emergencias de salud pública) y la detención en el contexto de la migración. Esto es esencial para preservar el derecho de todas las personas privadas de libertad a impugnar la legalidad de la reclusión, que es una norma imperativa de derecho internacional. Por consiguiente, el derecho a la asistencia letrada debe garantizarse desde el momento de la privación de libertad y, en el contexto de la justicia penal, antes del interrogatorio por las autoridades. Todas las personas privadas de libertad deben conocer su

²⁰ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 37; y observación general núm. 32 (2007), párr. 35.

²¹ Opinión núm. 46/2019, párr. 63. Véanse también las opiniones núm. 15/2020; y núm. 16/2020.

²² Opiniones núm. 75/2017; núm. 36/2018; núm. 45/2018; núm. 46/2018; núm. 44/2019; núm. 45/2019; y núm. 15/2020.

derecho a la asistencia letrada desde el momento de la detención y deben tener acceso a los servicios de asistencia letrada si no pueden costear esa asistencia por sí mismas²³.

83. El hecho de que no se proporcionara al Sr. Ho acceso a un abogado inmediatamente después de su detención y durante un tiempo suficiente constituyó una vulneración del derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, enunciado en el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto. Toda ley o procedimiento que pretenda suprimir el derecho a la asistencia letrada o demorar su reconocimiento hasta después de la fase de investigación es intrínsecamente contrario a las normas internacionales de derechos humanos²⁴.

84. La fuente alega además que se vulneraron el artículo 14, párrafo 1, del Pacto y el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos porque no se garantizó al Sr. Ho una vista imparcial y pública, ya que su juicio se aplazó y, al parecer, se celebró en secreto y a puerta cerrada. El Gobierno, sin embargo, afirma que el Sr. Ho fue juzgado de manera pública y transparente por un tribunal independiente y con competencia, y que la prensa informó de las actuaciones.

85. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha demostrado que en el juicio no se respetó el derecho del Sr. Ho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, lo que supone una vulneración del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Nada indica que en el presente caso se justificara la restricción del derecho a ser oído públicamente en virtud de alguno de los motivos previstos en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Además, el aplazamiento de la vista del recurso constituyó una vulneración del artículo 14, párrafo 5, del Pacto.

86. El Grupo de Trabajo ha tomado nota de las alegaciones de la fuente de que, pese a los problemas de salud crónicos del Sr. Ho, este fue trasladado a una prisión en la que se vio obligado a dormir sobre un suelo de baldosas sin colchoneta durante al menos tres semanas, y de que el Sr. Ho permaneció recluso con aproximadamente otros diez presos, una situación que no solo le resultó estresante, sino que además puso en peligro su vida y le generó presión psicológica. La fuente confirma que el Sr. Ho no fue torturado directamente, pero observa que los presos suelen sufrir intimidación mientras permanecen encarcelados. El Grupo de Trabajo no puede llegar a una conclusión respecto de estas alegaciones, que el Gobierno negó en su totalidad.

87. El Grupo de Trabajo concluye que las vulneraciones del derecho a un juicio imparcial son de tal gravedad que la privación de libertad del Sr. Ho debe considerarse una detención arbitraria correspondiente a la categoría III.

88. El Comité recuerda su preocupación por las denuncias de violaciones de las garantías de un juicio imparcial que amparan a los presos, especialmente en los casos de defensores de los derechos humanos, activistas políticos y personas acusadas de delitos relacionados con la seguridad nacional, en particular la denegación del derecho a la asistencia letrada, de acceso a un abogado de su elección y de que el juicio se celebre dentro de un plazo razonable y la falta de tiempo y medios para preparar su defensa²⁵.

d) Categoría V

89. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Ho fue perseguido por realizar actividades pacíficas como unirse a otros activistas y organizaciones de defensa del medio ambiente en sus críticas a la respuesta del Estado ante el derrame químico que se produjo en la planta de Formosa Ha Tinh Steel Corporation en 2016. Como ya ha observado el Grupo de Trabajo, en Viet Nam parece haber una tendencia a encarcelar a activistas que han tratado de crear conciencia sobre la catástrofe ambiental de la planta de Formosa Ha Tinh Steel Corporation²⁶.

²³ A/HRC/45/16, párr. 51; A/HRC/30/37, principio 9 y directriz 8; y Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 35. Véase también la opinión núm. 16/2020, párrs. 75 y 76.

²⁴ CCPR/C/VNM/CO/3, párrs. 25, 26, 35 y 36.

²⁵ *Ibid.*, párr. 35.

²⁶ Opiniones núm. 79/2017; núm. 27/2017; núm. 35/2018; núm. 45/2018; núm. 46/2018; núm. 9/2019; núm. 44/2019; y núm. 45/2019.

Además, en el análisis realizado antes en relación con la categoría II, el Grupo de Trabajo estableció que la privación de libertad del Sr. Ho había obedecido al ejercicio pacífico por este de los derechos que lo asisten en virtud del derecho internacional. Cuando la privación de libertad obedece al ejercicio activo de derechos civiles y políticos, existen sólidas razones para suponer que esta constituye además una vulneración del derecho internacional por entrañar discriminación basada en motivos de opinión política o de otra índole²⁷.

90. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Ho fue privado de libertad por motivos discriminatorios, a saber, por su condición de defensor de los derechos humanos, y sobre la base de sus opiniones políticas o de otra índole, que lo habían llevado a reclamar rendición de cuentas a las autoridades. Su privación de libertad constituyó una vulneración de los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto, y se inscribe en la categoría V de la detención arbitraria. El Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

e) Observaciones finales

91. El Grupo de Trabajo observa que en los últimos años se le han remitido varios casos como este en relación con la detención arbitraria en Viet Nam²⁸. En todos ellos se constata un patrón similar de reclusión prolongada en espera de juicio sin acceso a revisión judicial; reclusión en régimen de incomunicación; enjuiciamiento en virtud de disposiciones penales imprecisas por el ejercicio pacífico de los derechos humanos; denegación de acceso a asistencia letrada; celebración de un juicio breve y a puerta cerrada, sin observancia de las garantías procesales; imposición de penas desproporcionadamente severas; y denegación de acceso al mundo exterior. Este patrón apunta a la existencia de un problema sistémico en relación con la detención arbitraria en Viet Nam que, de continuar, puede constituir una vulneración grave del derecho internacional²⁹.

92. El Grupo de Trabajo agradecería cualquier oportunidad de colaborar constructivamente con el Gobierno para examinar la cuestión de la detención arbitraria. Ha transcurrido bastante tiempo desde su última visita a Viet Nam, que tuvo lugar en octubre de 1994, y el Grupo de Trabajo estima que es un buen momento para volver a visitar el país. El 11 de junio de 2018, el Grupo de Trabajo reiteró una vez más al Gobierno su solicitud de visita, y seguirá tratando de obtener una respuesta favorable.

Decisión

93. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Ho Van Hai es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 y 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 3, 9, 14, 16, 19, 25 a) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

94. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Viet Nam que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Ho sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

95. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería conceder al Sr. Ho el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

²⁷ Opiniones núm. 88/2017, párr. 43; núm. 13/2018, párr. 34; y núm. 59/2019, párr. 79.

²⁸ Opiniones núm. 45/2015; núm. 46/2015; núm. 40/2016; núm. 26/2017; núm. 27/2017; núm. 75/2017; núm. 79/2017; núm. 35/2018; núm. 36/2018; núm. 45/2018; núm. 46/2018; núm. 8/2019; núm. 9/2019; núm. 44/2019; núm. 45/2019; núm. 15/2020; y núm. 16/2020.

²⁹ Opinión núm. 47/2012, párr. 22.

96. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias que concurren en la privación arbitraria de libertad del Sr. Ho y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

97. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que armonice su legislación, en particular el artículo 88 del Código Penal, con las recomendaciones formuladas en la presente opinión y con los compromisos contraídos por Viet Nam en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

98. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos para que tomen las medidas correspondientes.

99. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

100. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, y que, a este respecto, le indiquen en particular lo siguiente:

- a) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Ho;
- b) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Ho y, de ser así, cuál ha sido el resultado de la investigación;
- c) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Viet Nam con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- d) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

101. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo mediante una visita del Grupo de Trabajo.

102. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

103. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado³⁰.

[Aprobada el 26 de noviembre de 2020]

³⁰ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.